



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

| | |
|------------|-------------------------------|
| PROCESO | Ejecutivo singular |
| DEMANDANTE | Industrial Concretos S.A.S. |
| DEMANDADA | Scala Ingenieros S.A. |
| RADICADO | 05001 31 03 001 2020 00265 01 |
| DECISIÓN | Confirma auto apelado |

Medellín, diecisiete de febrero de dos mil veintidós

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 12 de abril de 2021 el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín aceptó el desistimiento de la demanda presentada por la Sociedad Industrial Concreto S.A.S., por lo cual decretó la terminación del proceso y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en que solicitó revocar parcialmente el auto impugnado en relación con la ausencia de condena en perjuicios a la ejecutante y en su lugar se condene de conformidad con las disposiciones del artículo 92 del Código General del Proceso. En este sentido, adujo que la decisión del despacho se fundamenta en el artículo 92 del Estatuto Procesal, sin embargo, en cuanto a la condena o no de perjuicios, se aleja de tal precepto, debido a que, la norma en ningún acápite señala que la condena de perjuicios esté condicionada a la demostración de los mismos, sino por el contrario remite al incidente de que trata el artículo 283 ibídem. Sostuvo que las normas en cita establecen claramente que debe condenarse al pago de perjuicios al demandante que retire la demanda, salvo que exista acuerdo entre las partes, situación que en este caso no ocurrió. También insistió en que no

estaba de acuerdo con lo resuelto por el juzgado en primer lugar porque la norma no contempla la acreditación de los perjuicios para que sean concedidos, pues para la determinación de la cuantía de estos, existe un incidente con esa finalidad.

Por último, anotó que si bien se dispuso el levantamiento de medidas cautelares y se ordenó que por secretaría se librara los respectivos oficios, lo cierto era que no se habían emitido y por lo tanto la sociedad Scala Ingenieros S.A.S. no podía disponer de los recursos depositados en las diferentes entidades financieras, lo cual había impedido y dificultado el pago de obligaciones laborales, tributarias y contractuales.

1.3. En junio del mismo año el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín negó la reposición y mantuvo incólume lo resuelto, así que concedió el recurso de alzada.

Como fundamento de lo resuelto, la autoridad jurisdiccional consideró que el auto censurado se debía mantener, porque al momento de decidir sobre la imposición de la condena en perjuicios, se debe evidenciar la causación sin detrimento de aquellos que estén por fuera de la esfera del proceso que se decide y de los cuales se logre acreditación posterior y puedan ser reclamados en un proceso distinto, ya que, la condena en abstracto a lo único que conduce es a determinar el monto líquido, nunca a establecer si se causó o no el perjuicio de tal manera que, cuando el artículo 92 del Código General del Proceso establece que se debe condenar al pago de perjuicios es porque las actuaciones del proceso permiten verificar que el perjuicio se causó y de ninguna manera imaginarlo o suponerlo, sin perjuicio, de que sea la parte que lo sufrió la que logre probar que así sucedió en proceso separado.

Precisó que sería diferente en el evento en que el juez al momento de tomar una decisión de la que refiere el artículo en comento, cuente con elementos de juicio para indicar cuáles son los perjuicios indemnizables que requieren valoración, en ese caso sí se puede y debe imponer la condena *in genere* o en abstracto para que se adelante el trámite incidental previsto en el inciso final del artículo 283 ibídem.

2. CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 92 del Código General del Proceso al regular lo concerniente al retiro de la demanda, indica el momento en que este se puede hacer y las consecuencias que acarrea así:

"ARTÍCULO 92. RETIRO DE LA DEMANDA. El demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Si hubiere medidas cautelares practicadas, será necesario auto que autorice el retiro, en el cual se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes.

El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 283, y no impedirá el retiro de la demanda."

2.2. A su vez, el inciso 3 del artículo 283 ibídem establece que en los casos en que la codificación procedimental autoriza la condena en abstracto, ésta se liquidará por medio de un trámite incidental.

"ARTÍCULO 283. CONDENA EN CONCRETO. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.

El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.

En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho.

En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”.

2.3. Por otra parte, el artículo 2488 del Código Civil indica que toda obligación personal faculta al acreedor de perseguir su ejecución sobre los bienes del deudor.

"ARTICULO 2488. <PERSECUCIÓN UNIVERSAL DE BIENES>. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677.”.

2.4. No obstante lo anterior, el derecho que le asiste al acreedor de perseguir los bienes del deudor, no es absoluto. En este sentido, el artículo 2492 ib., define límites a esta garantía.

"ARTICULO 2492. <VENTA DE LOS BIENES DEL DEUDOR>. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que sigue.”

2.5. Frente a esta temática, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 24 de enero de 2005, hizo un análisis sobre el abuso del derecho frente a la práctica de medidas cautelares y la posibilidad de condenar en perjuicios al acreedor que se haya excedido en su solicitud.

"1.- La responsabilidad civil que se deriva del abuso del derecho, supone, desde luego, la existencia de un derecho, sólo que su ejercicio se realiza sin sujeción estricta a los fines económicos y sociales para el cual fue establecido, y al margen de los límites que el mismo ordenamiento jurídico señala.

El acreedor, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 2488 del Código Civil, puede embargar y secuestrar bienes para, llegado el caso, cubrir su crédito, los intereses y las costas del proceso. Derecho que, sin embargo, no es absoluto, porque el artículo 2492, ibídem, en concordancia con el artículo 513-8 del Código de Procedimiento Civil, lo limita "a lo necesario", a la par que, como es apenas obvio, únicamente puede recaer sobre bienes embargables del deudor y no de terceros.

En el ejercicio de esa facultad, el acreedor incurre en abuso del derecho, generador de responsabilidad civil, cuando las medidas cautelares que a instancia suya se practican son excesivas, a pesar de lo cual las mantiene, y cuando las mismas se proyectan sobre bienes que no son del deudor. La Corte tiene explicado que constituye abuso del derecho embargar "bienes del ejecutado en cuantía que exceda los límites legales" (sentencia de 2 de diciembre de 1993, CCXXV-728), mantener medidas que "ninguna garantía prestan para la efectividad de la obligación perseguida" (sentencia de 11 de octubre de 1973, CXLVII-81-82), y comprometer "haber pertenecientes a terceros" (sentencia de 27 de mayo de 1964, CVII-234-235).

En tales eventos, al demandante le corresponde demostrar el daño causado, la culpa del demandado y la relación de causalidad entre ésta y aquél. Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que el "empleo abusivo de las vías de derecho, sólo puede ser fuente de indemnización, cuando, simultáneamente con la demostración de la temeridad o mala fe con que actúa quien se vale de su ejercicio, el demandante acredita plenamente el daño que ha sufrido y su relación causal con aquellas" (sentencia de 12 de julio de 1993, CCXXV-97-98).".¹

3. CASO EN CONCRETO

¹ Corte Suprema de Justicia. Exp. C-2000131100011994-2131-01.

En esta oportunidad, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al mantener la decisión que aceptó el retiro de la demanda y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares practicadas sin imponer condena en perjuicios a la parte demandante, por considerar que en el presente caso no se contaba con los supuestos de existencia de presuntos perjuicios aludida por la sociedad demandada.

Al respecto, esta dependencia judicial de entrada advierte que lo resuelto por el fallador de primera instancia se encuentra ajustado a derecho, en tanto en principio, ningún exceso o arbitrariedad se aprecia en el ejercicio de la facultad cautelar por la ejecutante ni tampoco los abusos de que habla el precedente de la Corte Suprema de Justicia, frente a la práctica de medidas cautelares, que llevaría a una condena al pago de perjuicios, en los eventos en que el acreedor solicite el embargo de bienes del acreedor que excedan los límites legales, o en los casos en que las cautelas se proyecten sobre bienes que no son del deudor.

Ahora, es de advertir que a voces del artículo 92 del Estatuto Procesal, el juez podrá condenar en perjuicios a la parte demandante que efectuó el retiro de la demanda, sin embargo, dicha condena debe estar fundamentada en la efectiva acreditación de los perjuicios, pues como bien lo indicó en este caso el fallador de instancia en la providencia de 10 de junio de 2021, no le está dado a la autoridad judicial, imaginar o suponer que se la causó daño o perjuicio. Ello sumado a que el *a quo* tuvo razón al señalar que el trámite incidental de que trata el artículo 283 del Estatuto Procesal, está previsto para los eventos de certeza en la producción de perjuicios cuya cuantía se debe determinar en el incidente, situación que en el caso *sub judice* no se percibe.

Lo anterior sin perjuicio, como el juez señaló, de la posibilidad que la parte demandada tiene de acudir a la jurisdicción para demostrar la existencia de los perjuicios y solicitar el reconocimiento y pago de los mismos.

En conclusión, la decisión apelada, proferida por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín, será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

Apelación auto
Rdo. 05001 31 03 012 2020 00265 01
Confirma

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 12 de abril de 2021, proferida por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Se condena en costas de esta instancia a la parte recurrente y como agencias en derecho, se fija la suma de \$500.000 equivalente a medio SMLMV, tarifa mínima indicada en el numeral 7 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16–10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada